

ESTANISLAO OLIVARES D'ANGELO, S.J. *

LA SALUS ANIMARUM Y EL PROCESO CANÓNICO MATRIMONIAL

Fecha de recepción: julio 2006.

Fecha de aceptación y versión final: octubre 2006.

RESUMEN: Como indican las últimas palabras del Código de Derecho Canónico vigente en la Iglesia latina la «salus animarum» es la suprema ley de la Iglesia; también en el derecho procesal matrimonial. Ya en la Edad Media la decretal Clementina, *Saepe contingit*, suprimió en las causas matrimoniales el «estrépito judicial». Alfonso de la Vera Cruz propugnaba en 1599 que en las causas matrimoniales de los indígenas del Nuevo Mundo había que prescindir de todas las normas procesales que no fueran estrictamente necesarias; Tomás Sánchez juzgó muy acertada esa propuesta. En esa línea de simplificación del proceso canónico matrimonial se configuró a partir del siglo XIX el actual proceso documental, aplicable solamente en casos poco frecuentes; pero se han excluido del proceso oral las causas matrimoniales; y están excluidas de la facultad de dispensar de las leyes universales que tienen los obispos diocesanos las leyes procesales, ya que, se dijo, no se refieren directamente al bien de las almas. Pero, ¿no dañan al bien de las almas las vigentes leyes procesales en países del tercer mundo, donde no hay medios humanos para constituir tribunales y observar esas normas procesales?

PALABRAS CLAVE: *Streptus iudicii*, Alfonso de la Vera Cruz, proceso documental, proceso oral, dispensa de las leyes procesales.

* Facultad de Teología. Granada. Tribunal Metropolitano de Granada.
estol@probesi.org.

***The «salus animarum» and the canonical
process matrimonial***

ABSTRACT: As indicated in the last words of the Code of Canon Law currently in force in the Latin Church, the «salus animarum» is the supreme law of the Church; so as well it is in the marriage procedural law. Already in the Middle Ages the Clementine decretale, *Saepe contingit*, suppressed in the marriage trial the «strepitum iudicii». Alfonso de la Vera Cruz sustained in 1599 that in the marriage lawsuits of the natives of the New World one ought to dispense with all the procedural norms which were not strictly necessary; Tomás Sánchez judged that proposal to be very good. On that line of simplification of the canonical marriage process, it was made up from the XIX century onwards the actual documental process, applicable only in hardly frequent cases; but marriage lawsuits have been excluded from the oral process; and procedural laws have been excluded from the faculty of granting dispensation of the universal laws that Diocesan Bishops possess, since, it was said, they do not directly refer to the good of souls. Yet, does not hurt the good of souls the currently in force procedural laws in Third World countries, where there are not human means to constitute tribunals and keep the procedural norms?

KEY WORDS: *Strepitus iudicii*, Alfonso de la Vera Cruz, documentary process, oral process, dispensation from procedural laws.

I. LA SALUS ANIMARUM Y LA LEGISLACIÓN CANÓNICA

Al leer el último canon del vigente Código de Derecho Canónico, que trata del modo de proceder en el traslado de los párrocos, llaman la atención las palabras con que concluye ese c.1752: «prae oculis habita salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet». Dicen que las añadió personalmente el supremo legislador que promulgó ese código de leyes, Juan Pablo II.

En la nota de fuentes del canon¹ encontramos tres citas de autores, y seis de Romanos Pontífices recientes —tres citas de palabras de Pío XII, y tres de Pablo VI—, que justifican ese colofón final del vigente Código de Derecho Canónico.

Los autores citados son: Ivo de Chartres, *Decretum*, PL. 162, 74; S. Raimundo de Peñafort, *Summa de poenitentia et matrimonio*, *Introductio*, y Santo Tomás de Aquino, *Quaestiones quodlibetales*, 12, 16, 2. Citamos al primero:

¹ Sobre las características de estas «fuentes», véase: E. SASTRE, *Nota sobre las fuentes añadidas al Código de 1983*: Apollinaris 62 (1989) 541-550.

Escribe Ivo de Chartres en su epístola LX a Hugo, arzobispo de Lyon:

«Cum ergo omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum, istarum institutionum transgressiones aut districtius essent corrigendae, ut saluti prodessent, aut interim silentio premendae, ne spiritualia vel corporalia commoda supradictis modis impedirent»².

Las citas de Pío XII son sus *Allocutiones* de 24 de junio de 1939 (AAS 31 [1939] 248), de 2 de octubre de 1944 (AAS 36 [1944] 288) y de 17 de octubre de 1953 (AAS 45 [1953] 688). Escogemos dos de ellas:

Dice Pío XII en su alocución del 24 de junio 1939:

«Etiam iuris canonici disciplina ad animarum salutem dirigitur et omnibus normis legibusque suis in id potissimum tendit, ut hominis gratia Dei sancti effecti vivant et moriantur»³.

En su alocución a los miembros del tribunal de la Rota Romana, el 2 de octubre de 1944, dice:

«Nella stessa Enciclica spiegevamo altresì come tutta la Chiesa, nel suo corpo e nella sua anima, quanto alla partecipazione dei beni e al profitto che ne deriva, è costituita esclusivamente per la «salvezza delle anime», secondo le parole dell'Apostolo: "Omnia vestra sunt". Con ciò è indicata la superiore unità e il superiore scopo, cui sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni iuridica funzione nella Chiesa»⁴.

Las citas de Pablo VI son sus *Allocutiones* de 8 de febrero de 1973 (AAS 65 [1973] 94-103), la del 17 de septiembre de 1973 (L'Osservatore Romano, 213, 17-18 settembre 1973) y la del 4 de febrero de 1977 (AAS 69 [1977] 147-153).

En la alocución del 17 de septiembre de 1973 dijo a los participantes en el Congreso internacional de Derecho Canónico en la Universidad Católica de Milán:

«Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la *salus animarum*, resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi»⁵.

Y podemos encontrar la misma indicación sobre la *salus animarum*, como suprema ley de la Iglesia y consecuentemente del derecho proce-

² PL, 162, 74.

³ AAS 31 (1939) 248.

⁴ AAS 36 (1944) 288.

⁵ L'Osservatore Romano, 213, 17-18 settembre 1973.

sal canónico, en el discurso de Pablo VI también a los miembros de la Rota Romana, en el año siguiente, el 28 de enero de 1978, pocos meses antes de su muerte:

«Sapete che il diritto canonico qua tale, e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte, nei suoi motivi ispiratori rientra nel piano dell'economia della salvezza, essendo la *salus animarum* la legge suprema della Chiesa»⁶.

Y es muy notable que la Instrucción *Dignitas connubii*, del Pontificium Consilium de legum textibus, «servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii», en 2005, incluya también en su último artículo las palabras que añadió Juan Pablo II al último c.1752, del Código de 1983:

«*Dignitas connubii*, art. 308: Curet Episcopus Moderator ne ob rationem agendi ministrorum tribunalium necnon ob immodicas expensas fideles a ministerio tribunalium arceantur cum gravi damno *animabus quarum salus in Ecclesia suprema semper lex esse debet*».

Sin duda, se ha pretendido subrayar que también la *salus animarum* es la ley suprema en el derecho procesal matrimonial.

Por eso, tiene interés comprobar hasta qué punto esta suprema ley del bien de las almas ha regido la configuración legal del proceso matrimonial.

II. LAS FORMALIDADES DEL DERECHO PROCESAL MATRIMONIAL

Es claro que una de las exigencias de la *salus animarum*, de quienes acuden a los tribunales de la Iglesia para adquirir certeza sobre la existencia o nulidad de su matrimonio, es que el proceso sea razonable y equitativo en el tiempo y en los actos de que conste.

Juan Pablo II en su discurso a la Rota Romana, 26 de enero de 1984, aludió a la voluntad que se había tenido en el Código de Derecho Canónico, recién promulgado, de afrontar estas «críticas muy frecuentes y no del todo infundadas sobre la lentitud de las causas»:

⁶ Communicationes 10 (1978) 6.

«5. Nella riforma del diritto processuale canonico ci si è sforzati di venire incontro ad una critica molto frequente, e non del tutto infondata, concernente la lentezza ed eccessiva durata delle cause. Acogliendo pertanto una esigenza molto sentita, senza voler intaccare né diminuire minimamente le necessarie garanzie offerte dall'*iter* e dalle formalità processuali, si è cercato di rendere l'amministrazione della giustizia più agile e funzionale, semplificando le procedure, snellendo le formalità, accorciando i termini, aumentando i poteri discrezionali del giudice, ecc.»⁷.

Ahora bien, esta atención a la «suprema ley de la Iglesia», que es la *salus animarum*, referida a los procesos judiciales, y más concretamente, a los procesos matrimoniales, no es una novedad de los últimos tiempos; la encontramos en las Decretales del Corpus Iuris Canonici. Ya entonces se juzgó necesaria una simplificación del proceso judicial en las causas matrimoniales⁸.

En la decretal Clementina *Dispendiosam*, a principios del siglo XIV, encontramos la facultad de proceder en las causas matrimoniales «simple y llanamente, sin estrépito y figura judicial», incluso en las causas aún pendientes. Estas son sus palabras:

«*Dispendiosam* prorogationem litium, quam interdum ex subtili ordine iudicarii observatione causarum docet experientia provenire, restringere in subscriptis casibus cupientes, statuimus, ut in causis [...] nec non super matrimoniis et usuris, et eas quoquo modo tangentibus, ventilandis, procedi valeat de cetero simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura, volentes non solum ad futura negotia, sed ad praesentia, et adhuc etiam per appellationem pendentia, hoc extendi»⁹.

La célebre decretal *Saepe contingit* del mismo Clemente V explica y concreta esa simplificación de las causas matrimoniales y supresión en ellas del estrépito judicial. Primero indica algunas simplificaciones que se han de hacer en esos procesos y así evitar el «estrépito judicial»:

«*Saepe contingit*, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi man-

⁷ AAS 76 (1984) 646.

⁸ Un resumen de las formalidades del proceso canónico que se deduce de las decretales lo presenta F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, Romae 1926, §2, 6, p.18s.

⁹ (In) Clem. II, 1, 2. AE. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretalium collectiones*, col. 1143.

damus; de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur. Nos autem, dubitationem huiusmodi (quantum nobis est possibile), decidere cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut iudex, cui taliter causam committimus, necessario libellum non exigat, litis contestationem non postulet, tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum indultarum a iure, procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem, quantum poterit, faciat brevior, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo, partium, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia, testiumque superfluum multitudinem refrenando»¹⁰.

Suprime, pues, la necesidad de presentar la demanda por escrito, y el acto procesal de confrontación entre las partes; disminuye los días feriados; manda que el juez recorte las dilaciones en el proceso; que abrevie lo más posible la duración del proceso, rechazando excepciones y apelaciones que pretendan dilatar o frustrar el proceso, refrene las disputas entre las partes, los abogados y procuradores, y reduzca el número excesivo de testigos¹¹. Más adelante indicará que también se puede prescindir de la formalidad del acto de la conclusión de la causa.

También indica esta decretal las formalidades que no se pueden suprimir, como son las formalidades que exigen las pruebas necesarias y las legítimas defensas.

«Non sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones legitimae admittantur».

Las formalidades necesarias, de las que indica que no se puede prescindir, son las siguientes:

1. Las demandas del actor y del reo, si éste también las propone, y la constancia de ellas por escrito:

«Verum quia iuxta petitionis formam pronuntiatio sequi debet: pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, est in ipso litis exordio petitio facienda sive in scriptis sive in verbo, actis tamen continuo,

¹⁰ (In) Clem. V, 11, 2. AE.FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretalium collectiones*, col. 1200.

¹¹ F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, t.5-Iº p.571 nº753, sintetiza así esas supresiones: «Omitti possunt: 1. Libellus (etiam ore); 2. Litis contestatio (non solemniter); 3. Observatio feriarum; 4. Trina citatio, aut una peremptoria; simplex sufficit; 5. Conclusio in causa; 6. Formalitates sententiae».

(ut, super quibus positiones et articuli formari debeant, possit haberi plenior certitudo et ut fiat diffinitio clarior), inserenda»¹².

2. La citación de ambas partes y la exigencia del juramento de haber dicho la verdad y de decirla en el proceso:

«Citationem vero ac praestationem iuramenti de calumnia vel malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem huiusmodi intelligimus non excludi»¹³.

3. También es necesario que el juez señale un plazo a las partes para presentar las pruebas: interrogatorios, documentos, testigos:

«Et quia positiones ad faciliorem expeditionem litium propter partium confessiones, et articulos ob clariorem probationem, usus longaevis in causis admisit: nos, usum huiusmodi observari volentes, statuimus ut iudex, sic deputatus a nobis (nisi aliud de partium voluntate procedat), ad dandum simul utrosque terminum dare possit, et ad exhibendum omnia acta et munimenta, quibus partes uti volunt in causa, post dationem articulorum diem certam, quandocumque sibi videbitur, valeat assignare, eo salvo, quod, ubi remissionem fieri contingeret, pro testibus producendis possint etiam instrumenta produci, assignatione huiusmodi non obstante»¹⁴.

4. Juzga necesaria la ejecución de las pruebas: interrogatorio de las partes, a petición de ellas, o *ex officio*, si lo pide la equidad; que se comunique la decisión de la sentencia a las partes, previa citación, y se redacte por escrito; aunque no es necesaria la formalidad de la conclusión de la causa.

«Interrogabit etiam partes sive ad earum instantiam, sive ex officio, ubicumque hoc aequitas suadebit. Sententiam vero diffinitivam (citatis ad id, licet non peremptorio, partibus), in scriptis, et, prout magis sibi placuerit, stans vel sedens proferat, etiam (si ei videbitur) conclusione non facta, prout ex petitione et probatione et in aliis actis in causa faciendum»¹⁵.

¹² (In) Clem. V, 11, 2. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretalium collectiones*, col. 1200.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. F. X. WERNZ, *l.c.*, n°754, resume así las formalidades imprescindibles: «Retineri debent: 1. Citatio rei, et iuramentum calumniae; 2. Probationes necessariae et defensiones legitimaes; 3. Insertio in actis petitionis actoris; 4. Admissio positionum et articulorum, si proponantur; 5. Sententia in scriptis ferenda secundum petita».

Por último advierte que esta constitución suya no afecta a la validez del proceso, de modo que si se sigue en alguna causa el procedimiento solemne no por ello es inválido el proceso, ni se puede invalidar:

«Quae omnia etiam in illis casibus, in quibus per aliam constitutionem nostram vel alias procedi potest simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii volumus observari. Si tamen in praemissis casibus solemnis ordo iudiciarius in toto vel in parte non contradicentibus partibus observetur, non erit procesus propter hoc irritus, nec etiam irritandus»¹⁶.

Las normas procesales, promulgadas por algunas constituciones de los siguientes Romanos Pontífices en los dos siglos siguientes, no afectan al desarrollo del proceso canónico. Las leyes procesales del Concilio de Trento, promulgadas en 1564, por lo general, no afectaron a las formalidades del proceso canónico; tan sólo el c.20, *de reformatione*, de la sesión 24, puso plazo máximo a la duración de los procesos:

«Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes [...], in prima instantia coram ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, atque omnino, saltem ante biennium a die motae litis, terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus, vel alteri illarum, iudices superiores, alias tamen competentes, adire, qui causam in eo statu, quo fuerit, assumant et quam primum terminari curent»¹⁷.

Éstas eran, pues, las leyes procesales vigentes en la Iglesia católica, que se debían aplicar en todas sus diócesis a finales del siglo xvi, incluso en las causas matrimoniales que se instaran sobre matrimonios contraídos y residentes en las diócesis erigidas, no muchos años antes, en América.

III. PROPUESTAS DE ALFONSO DE LA VERA CRUZ

Alfonso de la Vera Cruz publicó en 1599, en Milán, su *Speculum coniugiorum*. En la tercera parte, *Quid debent servare Iudices Ecclesiastici in divortio*, trata de los procesos matrimoniales, y propugna que no pueden tener las mismas formalidades los procesos matrimoniales de los españoles y los procesos matrimoniales de los indios. Su pregunta es:

¹⁶ Ibid.

¹⁷ *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Istituto per le scienze religiose, Bologna 1973, 772.

«Utrum Iudices Ecclesiastici in causis matrimonialibus cum novi orbis neophytis teneantur servare figuram et strepitum iudicii, quam servant, et servare debent cum Hispanis»¹⁸.

Pretende probar que no se deben observar las mismas formalidades en ambos casos, con los neófitos del nuevo mundo y con los españoles. En apoyo de su proposición acude primero a las decretales clementinas *Dispendiosam* y *Saepe contingit*, y de la segunda deduce que las formalidades no necesarias se deben rechazar, con tal de que conste la verdad:

«Ex his omnibus, quae in dicta Clementina posita sunt, oportet ob oculis habere, in causa matrimonii, quantumcumque sit gravis, non oportere solemnitates iuris et figuram eius, sed solum illa spectanda et nullo modo omittenda, quae sunt necessaria ad cognitionem causae. Itaque, illa quae conducunt, sed necessaria non sunt, veniunt repellenda ex determinatione Pontificis, et quomodocumque constet de veritate, non est necessarium amplius».

Más aún, juzga que, con tal de que se pueda conocer la verdad, todas las formalidades —el mismo proceso judicial, su constancia por escrito, las pruebas de testigos, el notario— son dilaciones frustrantes y aportarían al proceso «el estrépito y figura de juicio», en contra de la decretal clementina:

«Imo, si potest bene cognosci veritas sine aliquo iudicio, sine aliqua scriptura, sine testibus, sine tabellione, et nullum est periculum, si ista non conscribantur, etiam videntur superflua, et sunt dilaciones frustratoriae, et est procedere cum strepitu et figura iudicii, contra Clementinam, *Dispendiosam*. Nam tabellio et testis simul cum scriptura requisita sunt, ut constet de veritate, et maneat veritas firmata, et nullus illorum, qui litigabant, post sententiam datam, possint contrarium affirmare, at per scripturam posset compelli, si negaverit. Sequitur ergo quod, ubi de hoc nihil timetur, non est necessarium adhibere testes et tabelliones et scripturam, sed strepitus videretur».

Estas afirmaciones tuyas juzga se deben aplicar no a los procesos matrimoniales de los españoles, sino a los procesos matrimoniales de los indios, puesto que:

«Non eaden apud omnes facient figuram et strepitus iudicii. Volo dicere quod strepitus et figura iudicii, quod Summus Pontifex deter-

¹⁸ A. DE LA VERA CRUZ, *Speculum coniugiorum*, Mediolani 1599, 321-323. De estas mismas páginas son los textos que a continuación copiamos y analizamos.

minat non observandam in matrimoniis, non est idem apud omnes gentes, sed illud, quod apud quosdam est strepitus et figura iudicii, apud alios non est; nam solum illa apud quamlibet gentem in iudiciis servari debent, ut patet ex voluntate Pontificis, quae videntur necessaria ad cognitionem veritatis et ad firmitatem ipsius».

Y aplica la consecuencia a los procesos matrimoniales entre indios:

«Si ergo datur aliqua natio, de qua non timetur quod istis utatur calumniis et astutiis, sed quae simplici verbo oboediat et numquam contradicat, Summo Pontifici videretur strepitum esse iudicii, adhibere in cognoscendis causis talium personarum et in sententiis tabellionem et testes et scripturam, sicut fieri solet cum aliis, qui calumniatores sunt».

Pero se le puede objetar por qué afirma con tanta firmeza que se pueden y deben aplicar estos principios a los procesos matrimoniales de los indios; pues bien, juzga que no son los obispos quienes pueden dar un juicio exacto en este asunto, sino que son los misioneros que conocen bien el modo de ser de los indios, los que deben juzgar de la oportunidad de aplicar estas normas más simples en los procesos matrimoniales de los indios:

«Sed numquid nationes novi orbis sunt huiusmodi? Affirment obsecro veritatem, non Episcopi qui, multis aliis curis impediti, non potuerunt mores Indorum cognoscere ad plenum; sed id proferant ministri qui intus et in cute norunt, numquid iudicii strepitum sit in audiendis eorum causis tabellionem et testes adhibere? Utrum sufficiat simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii in iis procedere?».

Al parecer, así proceden algunos religiosos, destinados por los obispos al cuidado pastoral de los indios:

«Ista placet hic notasse ex dictis illius Clementinae. Et volo meminerit teneri, propter quamdam satis aliquam scitu quaestionem, quam infra movebo, utrum religiosi, quibus a praelatis concessum est in matrimoniis neophytorum occupari, peccent non scribendo sententiam, et tabellionem et testes adhibendo. Et utrum sit necessarium, etiam si tanquam iudices procederent».

Por último saca sus conclusiones:

«Redeundo igitur unde digressi sumus ad quaestionem propositam respondemus per conclusiones».

La primera es:

«I.^a conclusio. Iudices Ecclesiastici in causis matrimonialibus procedentes cum novi orbis indigenis, simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii, sine tabellione et testibus iuratis, sine scriptura aliqua, dummodo causam cognoverint (eo modo quo cognoscibilis est) ubi nullus dolus, nulla fraus intervenit, non peccant».

La primera razón en que apoya esta conclusión primera son los textos de las decretales clementinas y las consecuencias que de ellas deduce:

«1.^a Ratio. Probatur in Clementina supra allegata, *Dispendiosam* [...] Et in Clementina, *Saepe contingit, de verborum significatione*. Et subditur in Clementina, *Dispendiosam*.

Sequitur ergo omnia alia necessario excludenda, quae non iuvant, seu non sunt necessaria ad causae cognitionem: at ad causae cognitionem parum tabellio et aliae dilationes faciunt. Oportet ergo procedere simpliciter, et de plano, sine aliquo istorum, dummodo per testes, vel alia via cognita causa, etiamsi non sint iurati.

Et probo: Scriptura et tabellio cum testibus sunt necessaria ad fidem faciendam in controversia, quae timetur; sed circa neophytos nihil tale timetur: ergo frustra tabellio adducitur».

La segunda razón, en que estriba esta conclusión primera, es la acomodación del proceso a las personas que en él intervienen:

«2.^a Ratio. Iuxta conditionem personarum procedat iudex.

Iudex etiam in causis arduis (sicut est matrimonium) debet procedere secundum conditionem personarum, ut cum personis gravibus cum scriptura et testibus; verum cum infimis sine aliquo istorum. Novi orbis indigenae sunt personae infimae; sequitur ergo quod sufficit verbun iudicis sine aliquo alio tabellione vel teste, qui auctoritatem praebeat».

Y después de probar esta afirmación con la autoridad del Panormitano, justifica la aplicación de esta doctrina a los indios de América:

«Itaque ex hoc doctore modus tractandi causam debet pensari, non ex causa ipsa, sed ex persona cuius est; at novi orbis indigenae sunt omnium hominum agricultorum, fullonum, laniorum, deiectionissimi; ergo ipsorum matrimonii causa (licet ipsa gravis) debet apud eos tractari sine strepitu, sine scriptura, sine tabellione, sine publicatione testium, sine iuramento testium, sine terminis peremptionis, sine aliis solemnitatibus, sed sufficit quod iudex (quisquis ille sit) cognita causa simpliciter et de plano sententiam verbo proferat sine tabellione, et tunc credendum est ei; nam non timetur quod tales infimae personae

postea non obediētes aliquid propter defectum tabellionis intentent contra sententiam iudicis, decipere volentes».

Y añade una interrogación exclamativa, que denota sus profundos sentimientos humanos hacia los sencillos cristianos, que defiende:

«Quid ergo opus est propter hoc quod est tabellio, non liberare laborantes, maxime quia pauperes sunt valde».

Tampoco faltan en su disertación palabras de indignación contra el proceder de los que se obstinan en proceder sin la comprensión hacia los indios que él propugna; los compara a los fariseos del evangelio:

«Haec propter aliquos, quos novi tam in hoc negotio scrupulosos et impeditos, ut volentes traditionem hominum observare, contemnunt praeceptum Dei, quibus dici potest quod dominus Pharisaei dixit: Propter traditiones vestras transgredimini Dei mandatum. Atque utinam non improprium sit talibus in die iudicii, qui volentes servare quae constituta sunt et a doctoribus declarata, ut in plurimum pro aliis nationibus quae pollent ingenio et astutia, animas misere perire permittant, non subveniendi eis simpliciter et de plano, sicut eorum conditio exigit».

Les aplica a ellos también los improperios de los profetas del Antiguo Testamento contra los malos pastores:

«Dominus (credo) in die iudicii loquetur illud Ezechielis [34]: Vae Pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos. Nonne greges a pastoribus pascuntur? Lac comedebatis, et lanis operiebamini, et quod crasum erat occidebatis; gregem autem meum non pascebatis, quod infirmum fuit non consolidastis, et quod aegrotum non sanastis, quod confractum erat non alligastis, et quod abiectum est non reduxistis, et quod perierat non quaesistis; sed cum austeritate imperabatis eis, et cum potentia. Et dispersae sunt oves meae, eo quod non esset pastor; et factae sunt in devorationem omnium bestiarum agri, et dispersae sunt, Erraverunt greges mei in cunctis montibus, et in universo colle excelso; et super omnem faciem terrae dispersi sunt greges mei, et non erat qui requireret; non erat, inquam, qui requireret».

Incluso increpa a los obispos:

«Propterea, pastores *observandi* audite verbum Domini; vos, inquam, Episcopi novi orbis audite verbum Dei [...]. Et sine dubio, qui circa neophytos in novo orbe strepitum et figuram iudicii observare volunt, non procedendo simpliciter et de plano, timeo sic eventurum, cum illi sint, quibus Dominus docet: Ego ipse pastores requiram gregem meum de manu eorum. Et vae illis».

IV. ECO DE ESTAS PROPUESTAS EN LOS CANONISTAS POSTERIORES

Tomás Sánchez se hace eco de estas propuestas de Alfonso de la Cruz en el libro 10 de su tratado *De sacrosancto matrimonii sacramento*, en la penúltima disputa, la 19.^a, en la que bajo el título, *Separación de los cónyuges en las Indias*, trata del modo judicial de llevar a cabo la separación en los casos de las Indias. Es notable, que tan solo cuatro años después de la publicación del *Speculum coniugum*, de Alfonso de la Cruz recoja Tomás Sánchez su doctrina. Además, es de subrayar que Tomás Sánchez pondera en favor del parecer de este autor el hecho de que es un testigo ocular de algo que juzga ser necesario: «qui huius necessitatis est testis oculatus».

Juzga, además bastante probable y muy razonable la doctrina de Alfonso de la Cruz sobre los procesos matrimoniales de los indios, sin forma judicial ruidosa:

«1. Prima conclusio sit. Satis probabile, et rationi consentaneum mihi videtur, ut servare non teneantur iudices Ecclesiastici cum Indorum neophytis, in divortii sententia ferenda et causis matrimonialibus, figuram ac iudicii strepitum, prout servant et servare debent cum Hispanis; atque ut possint simpliciter et de plano, absque tabellione et scriptura aliqua procedere, et absque iuramento testium, quando haec ob magnas expensas et Indorum paupertatem locique distantiam, non possunt commodè adhiberi; modo tamen pro viribus et posse enitantur de veritate certiores fieri»¹⁹.

Siguiendo también a Vera Cruz, Tomás Sánchez aplica la misma doctrina a los religiosos, que tienen confiado el cuidado pastoral de los Indios:

«2. Secunda conclusio. Religiosi, quibus neophytorum ex Indis cura commissæ est a suis praelatis, habentque assensum Episcopi ad utendum privilegiis sibi ipsis concessis circa Indos, possunt in causis matrimonialibus ipsorum tamquam iudices in utroque foro procedere; et quamvis ut iudices procedant, non tenentur exacte ordinem iudicii servare, ubi necessitas omittere compulerit, iuxta dicta n. præcedenti»²⁰.

¹⁹ T. SÁNCHEZ, *Disputationum de sancto Matrimonii Sacramento*. Tomus tertius. Liber decimus. Disputatio decimanona, Madrid, Ludovicus Sánchez, 1605, p.1519, n°1.

²⁰ T. SÁNCHEZ, *Disputationum de sancto Matrimonii Sacramento*. Tomus tertius. Liber decimus. Disputatio decimanona, Madrid, Ludovicus Sánchez, 1605, p.1519, n°2.

Añade, remitiéndose a Veracruz:

«Nec in hac conclusione volo immorari; sed eam asserit et confirmat Veracruz 3 p., Speculi, art. 11, conclusione 1.7. et 8. ex variis Pontificum privilegiis»²¹.

V. LA LEGISLACIÓN CANÓNICA EN LOS SIGLOS SIGUIENTES

No tuvieron eco en la legislación canónica estas propuestas, juzgadas tan razonables por Tomás Sánchez; durante muchos años no cambió en nada la legislación canónica sobre los procesos matrimoniales, nada nuevo se legisló en esta materia hasta la mitad del siglo XVIII. Pero entonces se impusieron nuevos requisitos en esos procesos.

La célebre constitución de Benedicto XIV, *Dei miseratione*, 3 de noviembre de 1741, establece en los tribunales el oficio del defensor del vínculo, e indica que su intervención en el proceso es necesaria para la validez de la sentencia judicial. Nada aporta en favor de una simplificación del proceso en circunstancias determinadas²².

Y un siglo después la Instrucción de la Congregación del Concilio, 22 de agosto de 1840, *Cum moneat*, impone al examen de los testigos *septimae manus*, que declaren sobre la veracidad de las declaraciones de los cónyuges²³.

Hay que esperar a fines del siglo XIX para encontrar unas primeras normas que aligeren el proceso canónico matrimonial; es el proceso documental, o, como se llamó en el CIC de 1917, *De causis exceptis a regulis hucusque traditis*, es decir, sobre las causas exceptuadas de las normas de los cánones anteriores.

VI. EL PROCESO DOCUMENTAL

Un primer atisbo de este proceso documental encontramos en la *Instructio de iudiciis ecclesiasticis circa causas matrimoniales* de la Congre-

²¹ Ibid.

²² *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. I, Romae 1923, p.697ss.

²³ M. LEGA, *Praelectiones in textum Iuris Canonici de Iudiciis ecclesiasticis*, Lib. II, vol. IV, Allegatum III, Romae 1901, p.587s.

gación de Propaganda Fide para los Ordinarios de los Estados Unidos de América, 1883: se indica la mayor facilidad de probar la existencia de algunos impedimentos mediante documentos. Esta prueba, solo por documentos, se refería, de hecho, a tres impedimentos, los de parentesco carnal o espiritual y de afinidad. Dice esta Instrucción:

«§31. Si matrimonium impugnetur ob assertum impedimentum cognationis carnalis aut spiritualis, vel affinitatis, facile erit eiusdem existentiam detegere ope authenticorum documentorum. [...] Caeterum iudex semper prae oculis habeat, his quaestionibus dirimendis praecipuum fundamentum praebere documenta authentica, et nunquam licere contra eadem iudicare, nisi ex certis et evidentibus argumentis constiterit ipsa vitiosa aut falsa esse»²⁴.

Estas mismas normas respecto a esos mismos impedimentos de parentesco envió la Congregación del Santo Oficio a los obispos de ritos orientales²⁵.

Una aplicación más amplia del proceso documental a las causas matrimoniales la encontramos seis años después en el decreto de la Congregación del Santo Oficio de 5 de junio de 1889, que extiende este proceso a otros impedimentos; los aplica en concreto a los impedimentos de disparidad de cultos, de vínculo, de consanguinidad, de parentesco espiritual; y suprime la necesidad en ese caso de una doble sentencia afirmativa de la nulidad del matrimonio:

«[...] dummodo ex certo et autentico documento, vel, in huius defectu, ex certis argumentis evidenter constat de existentia huiusmodi impedimentorum super quibus Ecclesiae auctoritate dispensatum non fuerit; hisce in casibus, praetermissis solemnitatibus in Constitutione Apostolica *Dei miseratione* requisitis, matrimonium poterit ab Ordinariis declarari nullum, cum interventu tamen defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia»²⁶.

En esos casos, es el Ordinario quien declara la nulidad del matrimonio.

Cinco años después, el 14 de febrero de 1894, respondió la misma Congregación del Santo Oficio que el decreto anterior de 1883 era de aplicación general:

²⁴ Ibid., Allegatum IV, p.598s.

²⁵ *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1926, doc. 1076, p.401.

²⁶ *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae 1926, doc. 1118, p.447. También: ASS, vol. 26, p.639.

«An decretum S.O., 5 Iunii 1889, quo in nonnullis causis matrimonialibus derogatur solemnitatibus Constitutionis Benedictinae, sit generale nec ne. R. Affirmative»²⁷.

Dos años después, el 10 de junio de 1896, la misma Congregación del Santo Oficio detalla más sus anteriores respuestas:

«[...] Si vero agatur de investigando impedimento disparitatis cultus ad effectum declarandi nullitatem vinculi praeexistentis, quo contrahere volentes innodati sunt, uti iam anno 1889 sub die 20 Martii, et iterum sub die 5 Iunii statuit haec ipsa S. Officii Congregatio procedi possit, praetermissis solemnitatibus in Constitutione *Dei miseratione* requisitis, modo summario et extraiudiciali; semper tamen forma iudicialis quoad substantialia servari debet, cum interventu defensoris vinculi matrimonialis; et, si evidenter de impedimenti existentia constet, Ordinarius procedere potest ad proferendam nullitatis sententiam. Plenum est ex iis deducere quod in hoc secundo casu semper requiritur forma iudicii quoad substantialia, nec non interventu defensoris vinculi matrimonialis, quod profecto a nemine praestari poterit, nisi prius habita speciali ac regulari delegatione»²⁸.

Otra respuesta del mismo Santo Oficio, 27 de marzo de 1901, confirma ese procedimiento judicial sumario en algunos casos de defecto de forma canónica²⁹.

Estas tentativas de simplificación del proceso ordinario dieron lugar en el Código de Derecho Canónico de 1917 a los cc.1990-1992, bajo la forma de excepciones a las normas generales; la rúbrica de ese capítulo VII, del título XX, es: *De casibus exceptis a regulis hucusque traditis*. En el c.1990 se indicaban los impedimentos, cuya existencia podía ser probada por un documento auténtico:

«1990. Cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit de existentia impedimenti disparitatis cultus, ordinis, voti sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis aut cognationis spiritualis, simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super his impedimentis datam non esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus, matrimonii nullitatem declarare, cum interventu tamen defensoris vinculi».

²⁷ Ibid., doc. 1168, p.483.

²⁸ Ibid., doc. 1180, p.489s.

²⁹ Ibid., doc. 1251, p.532.

Una interpretación amplia de las exigencias del c.1990 la dio la Comisión de Intérpretes el 16 de junio de 1931:

«I. Utrum “par certitudo”, de qua in canone 1990, haberi possit tantum ex certo et authentico documento, an etiam alio legitimo modo.
Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

II. Utrum “citatio partium”, de qua in canone 1990, facienda sit ante declarationem nullitatis matrimonii.
Resp.: Affirmative»³⁰.

En cambio, la Comisión de Intérpretes el 6 de diciembre de 1943 rechazó otra interpretación extensiva del c.1990:

«Utrum casus excepti c.1990 sint taxative, an demonstrative enuntiat. [...]

Resp.: Ad I [...] Affirmative ad primam partem, negative ad secundam»³¹.

La instrucción de la Congregación de Sacramentos, de 15 de agosto de 1936, *Provida Mater*, artículos 226-228, nada aporta en orden a la simplificación de las solemnidades del proceso judicial de nulidad de un matrimonio en esos «casos exceptuados» de las normas generales³². Las mismas normas se repiten en el Motu proprio *Sollicitudinem Nostram*, cc.498-500, de 6 de enero de 1950, que trata *De iudiciis pro Ecclesia Orientali*³³.

El Motu proprio, *Causas matrimoniales*, 28 de marzo de 1971, X-XIII, AAS 63 (1971) 445s., y lo mismo exactamente el Motu proprio, ad Ecclesias Orientales, *Cum matrimonialium*, 8 de septiembre de 1973, X-XIII, AAS 65 (1973) 580, extienden la posibilidad de este proceso, que prescinde de las solemnidades obligatorias en otros casos, a todos los impedimentos, y también a los matrimonios cuya nulidad se impugna por falta de forma canónica o de mandato válido del procurador.

A la Comisión «Codicis Iuris Canonici recognoscendo» llegó alguna indicación a favor de una mayor amplitud en la aplicación del proceso documental. En la sesión de 30 de marzo de 1979 se notificó que:

³⁰ AAS 23 (1931) 353.

³¹ AAS 36 (1944) 94.

³² AAS 28 (1936) 313.

³³ AAS 42 (1950) 106.

«De sententia cuiusdam organi consultationis, usus processus documentalibus admitti deberet etiam in causis ex defectu consensus, quando eadem certitudo per documenta habeatur.

Consultores censent hanc solutionem magnas difficultates praebere, quin dicatur de abusibus qui evenire possent»³⁴.

Por ello, el vigente derecho procesal matrimonial, c.1686, permite la aplicación de este proceso documental solamente a los casos de todos los impedimentos dirimentes, de defecto de forma legítima, o de carencia de mandato válido en el matrimonio por procurador.

VII. APLICACIÓN DEL PROCESO ORAL A LAS CAUSAS MATRIMONIALES

Otra posible simplificación de normas en los procesos matrimoniales hubiera sido la aplicación en ellas del proceso oral, que se proponía para las causas contenciosas de menor gravedad.

En el Motu proprio *Sollicitudinem Nostram*, cc.498-500, de 6 de enero de 1950, que trata *De iudiciis pro Ecclesia Orientali* encontramos una sección, cc.453-467, intitulada *De iudicio contentioso coram unico iudice*³⁵.

En la presentación de los trabajos de la Comisión revisora del CIC, 1972, se resalta la novedad del nuevo proceso que se propone incluir en el futuro Código bajo el título de *Processus contentiosus summarius*. Se informa a la Comisión que este proceso sumario:

«c) Longinquam radicem habet in Const. “Saepe” Clementis Pp V, et recentem expressionem in Codice Orientali, “De iudicio contentioso coram unico iudice” (cc.453-467). Relate ad vigentem Codicem constituit omnimodam novitatem»³⁶.

Se ponderaron las ventajas de este nuevo proceso:

«[...] processus iste, flexibilis et celer, proponetur in aliis controversiis, non omnino gravibus, quae exigant promptam solutionem ob bonum animarum et cessationem simultatum inter entia vel communitates ecclesiales»³⁷.

³⁴ Communicationes 11 (1979) 269.

³⁵ AAS 42 (1950) 98s.

³⁶ Communicationes 4 (1972) 60.

³⁷ Communicationes 4 (1972) 61.

Ya desde esta su presentación se excluían expresamente de este procedimiento las causas matrimoniales; se proponía la siguiente cláusula:

«Praeter causas quas ius commune submittit processui summario, Conferentia Episcopalis poterit eidem formae processuali demandare alias controversias, exclusis semper causis matrimonii aliisque tribunali collegiali reservatis»³⁸.

En la sesión de 31 de marzo de 1979 se propuso a los consultores añadir un canon, c.354, en que constase la exclusión de este proceso sumario en las causas matrimoniales de nulidad:

«Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu summario tractari, praeter casus de quibus in c.531»³⁹.

Puesto que ya se había decidido el nombre de «proceso oral», así se lo nombra en la formulación aprobada:

«Causae ad matrimonii nullitatem declarandam nequeunt processu contentioso orali tractari»⁴⁰.

Se dio cuenta también de una propuesta que había llegado a la Comisión:

«Nonnulla organa consultationis (quattuor tantum) petierunt ut omnes causae matrimoniales tractari possent processu contentioso *orali*, salvo iure partium petendi processum contentiosum ordinarium.

Propositio non placet consultoribus, sive quia fere omnia organa consultationis, uti ex consultatione ipsa constat, praeferunt processum contentiosum ordinarium, sive quia processus contentiosus oralis nunc primo introducitur in usu nostrorum tribunalium et ideo periculosa videtur in re tanti momenti repentina tam gravis immutatio, sive tandem quia ratio assequendi celeriore processum non iam cogens videtur cum in novissima revisione simpliciores factae sunt normae de processu contentioso ordinario»⁴¹.

En la sesión plenaria de la Comisión revisora del CIC, octubre de 1981, se informó sobre las advertencias hechas al esquema novísimo. A propósito del canon que prohibía el proceso oral en las causas de nulidad matrimonial uno de los consultados pedía:

³⁸ Communicationes 4 (1972) 61s.

³⁹ Communicationes 11 (1979) 271.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

«Can. 1642. Non excludantur causae matrimoniales ab hac optima procedura quae utiliter applicari potest ad causas de nullitate matrimonii, ita ut istae non amplius formalitatibus processus contentiosi ligentur. Proponitur: “Causae ad matrimonii nullitatem declarandam possunt processu contentioso *orali* tractari” (Aliquis Pater).

R. Propositio admitti nequit. Processus contentiosus oralis non dat satisfationes (“garanzie”), quae processui matrimoniali propter vinculum sacramentale necessariae sunt.

Immo, consultores unanimiter, ad praecavendos abusus hac in re, ad c.1608, addere proponunt §2 qui ita sonat:

§2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos, actus iudiciales sunt nulli»⁴².

Esa propuesta unánime de los consultores pasó a ser el párrafo 2 del vigente c.1656.

Por consiguiente, el proceso oral, que podría simplificar los procesos matrimoniales, no se puede seguir en las causas matrimoniales.

VIII. ¿ES APLICABLE ESTE DERECHO PROCESAL EN TODAS PARTES?

Se puede preguntar: ¿se estudió la posibilidad de conceder excepciones en los territorios donde la legislación vigente, resultase ser contraria a la *salus animarum*, a la suprema ley de la Iglesia?

En la elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico no faltaron voces que recuerdan las indicaciones de Alfonso de la Cruz, cuatro siglos antes.

Entre los juicios negativos que se hicieron al esquema del nuevo Código encontramos los siguientes, que constan en las actas de la sesión tenida el 3 de abril de 1978:

«II. Sententiae negativae de schemate in genere:

Sententiae negativae prolatae sunt a 15 organis consultationis varia ob motiva quae ita enucleari possunt:

— Quidam, etsi dicant schema per se esse validum instrumentum, tamen censent in suis regionibus difficulter in praxim deduci posse ob nimiam penuriam mediorum et praesertim personarum quae

⁴² Communicationes 16 (1984) 76s.

- ius canonicum calleant. Quin immo addunt indolem nostri schematis repugnare culturae et ingenio illorum populorum.
- Nonnulli conquesti sunt eo quod schema nimio iuridismo adhuc sapit et plures adhuc retinet formalitates ac sollemnitates quae telam iudiciariam nimis machinosam reddunt. [...]
 - Unus Episcopus censuit hodierna adiuncta Ecclesiae populorum et culturarum talia esse ut iam concipi nequeat Codex aliquis legum qui sit unicus pro tota Ecclesia, quasi adhuc vigeat regimen “christianitatis”, ut aiunt, vel Ecclesia ab omnibus habeatur tamquam societas independens in suo ordine perfecta.
 - Aliquibus videtur schema confectum esse ad usum tribunalium magnarum dioecesium, quibus non desunt homines et media ad machinam iudiciariam extruendam, ubi etiam laici colunt studium iuris canonici. Alibi autem indoles iuridica schematis erit omnino extranea mentalitati fidelium.
 - Fere ubique ius processuale canonicum unice pro causis matrimonialibus adhibetur, dum in dies crescit persuassio viam iudiciariam esse minus aptam ad decidendum de facto tam peculiari quod est matrimonium, in quo partes non sunt considerandae tamquam «adversariae», in lite contentiosa sibi invicem oppositae».

Por otra parte, algunas de las mejoras que se propusieron al proyecto de nuevo derecho procesal fueron:

«III. Vota ad schema perficiendum.

- Normae, quae non sint essentielles ad structuram processus, possent in aliquo directorio colligi, vel possent omitti simpliciter, facultate facta Conferentiis Episcoporum edendi peculiares ordinationes pro suis tribunalibus.
- Est qui censeat extollendam esse proceduram oralem prae procedura scripta, atque ampliorem usum proceduræ per transactionem et per arbitros introducendam esse.
- Nonnullis placeret auctoritatem discretionalem iudicis in quibusdam articulis processus augere, ita ut actiones dilatoriae refrenari et formalitates quaedam certis sub conditionibus supprimi possint et ita ad sententiam cito pervenire, salvis semper iustitia et contradictorio partium in cursu processus»⁴³.

No tuvieron ninguna acogida en la Comisión reformadora del Código estos juicios y propuestas. Más aún, se rechazó la posibilidad de que los

⁴³ Communicationes 10 (1978) 210s.

obispos pudieran dispensar de las leyes procesales; se excluyó esa facultad de la potestad general que se les concedió para dispensar de otras leyes generales disciplinarias de la Iglesia.

En el vigente c.87, §1, que concede a los obispos diocesanos la potestad de dispensar de las leyes universales de la Iglesia, «siempre que a su juicio ello redunde en bien espiritual de los fieles», se excluyen expresamente de esa potestad de dispensar las leyes procesales; dice así:

«87, §1. El Obispo diocesano, siempre que a su juicio ello redunde en bien espiritual de los fieles, puede dispensar a estos de las leyes disciplinarias, tanto universales como particulares, promulgadas para su territorio o para sus súbditos por la autoridad suprema de la Iglesia; pero no de las leyes procesales o penales, ni de aquellas cuya dispensa se reserva especialmente a la Sede Apostólica o a otra autoridad».

Ya el Código anterior, de 1917, era muy restrictivo y negativo respecto a esta facultad de los obispos diocesanos y ordinarios de dispensar de las leyes de la Iglesia:

«A generalibus Ecclesiae legibus Ordinarii infra Romanum Pontificem dispensare nequeunt, ne in casu quidem peculiari, nisi haec potestas eisdem fuerit explicite vel implicite concessa, aut nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, et de dispensatione agatur quae a Sede Apostolica concedi solet».

Como antecedente de la reforma posterior de este canon tenemos el decreto del Concilio Vaticano II, *Christus Dominus*, sobre el oficio pastoral de los obispos en la Iglesia, que en su número 8.b) concedía a los obispos diocesanos una amplísima facultad de dispensar de las leyes generales de la Iglesia en los casos particulares:

«Singulis Episcopis dioecesanis facultas fit a lege generali Ecclesiae in casu particulari dispensandi fideles in quos ad normam iuris exercent auctoritatem, quoties id ad eorum bonum spirituale iudicent, nisi a Suprema Ecclesiae Auctoritate specialis reservatio facta fuerit»⁴⁴.

Pronto quedó restringida esa amplísima facultad de dispensar que el concilio había otorgado a los obispos. El 15 de junio de 1966 se publicó el Motu proprio de Pablo VI, *De Episcoporum muneribus*, sobre la facultad de los Obispos para dispensar de las leyes generales de la Iglesia; en su artículo IV aclara que las leyes procesales no son objeto de esa facul-

⁴⁴ AAS 58 (1966) 676.

tad general de dispensar concedida a los obispos diocesano, «porque la dispensa de las leyes procesales no se refieren directamente al bien espiritual de los fieles» (!):

«Leges ad processus spectantes, cum ad iurium defensionem sint constitutae, et dispensatio ab iis bonum spirituale fidelium directe non respiciat, non sunt obiectum facultatis, de qua agitur in Decreto «*Christus Dominus*», n. 8b»⁴⁵.

Sin embargo, dos años después, en la reunión de la Comisión revisora del Código, en febrero de 1968, se aprobó una redacción del entonces c.81, §1, que reproducía la concesión del decreto conciliar, *Christus Dominus*, y no se hacía eco de la interpretación restrictiva del Motu proprio de Pablo VI; este texto alude al bien espiritual de los fieles como causa razonable para otorgar la dispensa de una ley, y no excluye explícitamente las leyes procesales; decía así:

«Canon 81, §1. A generalibus Ecclesiae legibus Episcopi diocesani dispensare valent in casu particulari fideles in quos ad normam iuris exercent auctoritatem, quoties id eorum bonum spirituale conferre iudicent, nisi a Suprema Auctoritate specialis reservatio facta fuerit»⁴⁶.

Pero al año siguiente, en octubre de 1969, se modificó notablemente la formulación, pues se limitaba la facultad de los obispos diocesanos de dispensar de las leyes universales de la Iglesia a las leyes que directamente se ordenan al bien espiritual de los fieles:

«Canon 2 (81), §1. Ab universalibus Ecclesiae legibus aliisque a suprema Ecclesiae auctoritate latis, pro suo territorio dispensare valent Episcopi diocesani, ad normam c.19 (de Episcopis diocesanis)»⁴⁷.

Este proyectado c.19, §1, decía:

«Episcopus dioecesanus in disciplinaribus legibus, tam universalibus quam particularibus a suprema Ecclesiae auctoritate pro suo territorio latis, quae ad bonum spirituale *directe* ordinantur, tum praeceptivis et prohibitivis, tum irritantibus et inhabilitantibus, dispensare valet, in casibus particularibus, fideles in quos ad normam can ... auctoritatem exercet, quoties id ad eorundem bonum spirituale conferre iudicet, firmo praescripto c.81, §2, et salvo praescripto §2»⁴⁸.

⁴⁵ AAS 58 (1966) 469.

⁴⁶ Communicationes 19 (1987) 77.

⁴⁷ Communicationes 19 (1987) 183.

⁴⁸ Communicationes 19 (1987) 183, n.1.

Esta redacción del canon se aprobó por unanimidad de los consultores de la Comisión en la sesión de los días 28 a 31 de enero de 1969⁴⁹.

Cinco años después, en las sesiones de mayo de 1974 se estudió una redacción de ese canon, equivalente a la propuesta en 1969:

«Canon 88, §1. Episcopus diocesanus in disciplinaribus legibus, tam universalibus quam particularibus a suprema Ecclesiae auctoritate pro suo territorio latis, dispensare valet ad normam c.19 (de Episcopis dioecesanis)»⁵⁰.

Pasados otros cinco años, en las sesiones de mayo de 1979, se incorporaron las modificaciones que habían sugerido los obispos, universidades y dicasterios de la curia romana. Una de las propuestas de una Conferencia episcopal indicaba:

«III) Consideratur propositio alicuius Episcoporum Conferentiae excludendi nempe potestatem dispensandi a legibus ad processus spectantibus»⁵¹.

Como se ve, esa Conferencia Episcopal hizo presente la reducción que del decreto conciliar había hecho el Motu proprio de Pablo VI.

Se propusieron a votación cuatro nuevas redacciones de ese canon; fue aprobada por unanimidad la tercera redacción que excluía expresamente de la facultad de dispensar de los obispos diocesanos la dispensa de las leyes procesales:

«Episcopus diocesanus, quoties id ad fidelium spirituale bonum conferre iudicet, eos dispensare valet in legibus disciplinaribus, non processualibus nec poenalibus, et quidem tam universalibus quam particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, nisi eorumdem dispensatio Apostolicae Sedi aliive auctoritati specialiter reservata fuerit»⁵².

En el texto del año siguiente, 1980, *Schema Codicis Iuris Canonici, iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum*, enviado reservadamente a los Padres de la Comisión, el c.87 tiene una

⁴⁹ Communicationes 19 (1987) 78.

⁵⁰ Communicationes 23 (1991) 44.

⁵¹ Communicationes 23 (1991) 214.

⁵² Communicationes 23 (1991) 215.

redacción diferente, pero equivalente, al aprobado en las sesiones de mayo del año anterior; esta redacción pasó a ser la definitiva en el Código de Derecho Canónico, 1983, actualmente en vigor.

«87, §1. El Obispo diocesano, siempre que a su juicio ello redunde en bien espiritual de los fieles, puede dispensar a estos de las leyes disciplinarias, tanto universales como particulares, promulgadas para su territorio o para sus súbditos por la autoridad suprema de la Iglesia; pero no de las leyes procesales o penales, ni de aquellas cuya dispensa se reserva especialmente a la Sede Apostólica o a otra autoridad».

Si analizamos el texto aprobado se pueden ocurrir diversas interpretaciones; la más obvia, aunque dolorosa, sería que, a propuesta de una Conferencia Episcopal y teniendo en cuenta la restricción impuesta por Pablo VI, la Comisión aceptó que las leyes procesales no se oponen nunca al bien espiritual de los fieles, sometidos a ellas. Pero nos preguntamos muy en serio, teniendo en cuenta la realidad de tantas diócesis y regiones desprovistas de personal preparado en el conocimiento de las leyes procesales eclesásticas: ¿es verdad que la observancia estricta de las leyes procesales en las causas matrimoniales nunca de oponen al bien de los fieles?

En todo caso, el hecho es que no convencieron a la Comisión los juicios negativos sobre el proyecto de leyes procesales, que se les propusieron en abril de 1978, y que hemos reproducido anteriormente. Ni tampoco aceptó la Comisión la propuesta de dejar un margen normativo a los directorios de las Conferencias Episcopales, como indicaba la primera de las propuestas de entonces:

«Normae, quae non sint essentielles ad structuram processus, possent in aliquo directorio colligi, vel possent omitti simpliciter, facultate facta Conferentiis Episcoporum edendi peculiares ordinationes pro suis tribunalibus»⁵³.

Pero hay tener presente un hecho, que muestra la voluntad del supremo legislador de la Iglesia, promulgador en 1983 del vigente Código de Derecho Canónico, y que está expresada en la norma que cierra el Código vigente, c.1752, y propugna que «la *salus animarum* debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia»; y en esa norma suprema ha insistido y la ha aplicado expresamente al derecho procesal el último artículo, 308, de

⁵³ Communicationes 10 (1978) 210s.

la Instrucción *Dignitas connubii*: «animarum [...] salus in Ecclesia suprema semper lex esse debet». Esta norma, por tanto, y a pesar de todo, debe prevalecer en la aplicación de las normas procesales en las causas matrimoniales.

A tenor de esta voluntad expresa y reiterada del supremo legislador de la Iglesia es de esperar que los correspondientes Dicasterios vaticanos otorgarán amplias dispensas en la aplicación de las leyes procesales en los territorios en los que, a juicio del obispo, la aplicación exacta de las leyes procesales dañaría el bien espiritual de los cristianos. Y en esas diócesis y regiones se decidirán las causas matrimoniales sin el actual «estrépito judicial», porque no es posible aplicar a las causas matrimoniales de esos cristianos —pensemos en muchos de los que viven en el «tercer mundo»— las mismas normas que se pueden aplicar en el «primer mundo»; así pensaba hace cuatro siglos Alonso de la Vera Cruz, y Tomás Sánchez juzgaba acertados sus razonamientos.